

Santiago, once de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se sustanció la causa RIT 243-2023 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sobre el delito de robo con intimidación, verificado en esta ciudad el 5 de febrero de 2023, ilícito previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal.

Por sentencia definitiva de 17 de enero de 2024 los jueces de dicho tribunal decidieron **condenar como autores** del señalado delito de robo con intimidación a **Juan Luis Jara Rojas** y **Ezequiel Erasmo Cáceres Gallegos**, a sufrir las penas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, respectivamente, más las accesorias pertinentes, en cada caso.

Contra ese fallo la defensa de los acusados interpuso recurso de nulidad, esgrimiendo la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, con relación a lo previsto en los artículos 342, letra c) y 297 del mismo texto legal.

El recurso fue declarado admisible, indicándose audiencia para su vista, oportunidad en que fueron oídos los alegatos de los intervinientes que comparecieron a estrados.

Considerando:

I.- Respecto del recurso:

Primero: La defensa asevera que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal incurrió en un error de valoración probatoria al descartar la teoría alternativa de la defensa que se basa – en resumen- en que la víctima (Víctor Novoa) conocía a uno de los acusados (Ezequiel Cáceres) por haber compartido juntos pocos días antes, lo que fue declarado por ambos sentenciados, quienes además indican que en la madrugada del 5 de febrero de 2023 iban camino a comprar droga, pasando por la medialuna del cerro Dieciocho, donde encuentran a Novoa, a eso de las 6 am, quien encarga a Cáceres \$10.000 de droga, para luego consumirla (los tres) en el interior del vehículo objeto del robo. Prosigue la tesis señalando que, en algún punto, Novoa abandona el vehículo por su voluntad y sin entender dónde se fue, luego de buscarlo, se llevan el vehículo al domicilio de Cáceres, en el entendido que éste sabía dónde vivía. Así, Cáceres declara *“lo salimos a buscar al estacionamiento, no lo encontramos y a donde el me conocía a mí, donde*



habíamos estado antes juntos, yo le digo al Juanja llevemos la camioneta pa' fuera de mi casa, él sabe dónde yo vivo, porque él me había ido a dejar dos días antes a mi casa...

Critica el recurrente que las razones del tribunal para descartar la tesis de la defensa provengan de que los acusados *“ni siquiera pudieron decir cuál es el nombre completo de la víctima o cual era su dirección, de modo que no es plausible que hayan sido amigos”*, ello tomando en cuenta que la víctima negó haberlos visto antes y descartando además el indicio referente a que la denuncia no se efectuó en forma inmediata.

Agrega que el tribunal realiza afirmaciones categóricas que no se corresponden con la prueba del juicio porque se concentra en los hechos y la prueba favorable a la pretensión fiscal y omite valorar aquella favorable a los acusados.

Segundo: Que el reproche específico del recurso se funda en que en el juicio se establecieron hechos y circunstancias que, de haber sido ponderados, habrían conducido a una decisión absolutoria. Ello en razón de que: 1) La víctima en su primera declaración afirmó *“me encontraba en la medialuna en una fiesta al interior de mi vehículo”*; 2) Los imputados no se escondieron ni escondieron el vehículo, como sería esperable conforme a la tesis del ministerio público; 3) Existe coincidencia entre los testigos que Carabineros controló a los sentenciados no por la búsqueda de un vehículo robado, sino por los ruidos molestos que hacían al drogarse estacionados en la vía pública; 4) El lugar en que fueron encontrados los acusados no fue camino a una desarmaduría ni en un taller clandestino, sino a solo 7 minutos, en vehículo de la medialuna; 5) No se encontró ningún arma durante el proceso y ni siquiera se presentó una fotografía de ella en juicio; y 6) Tampoco se encontraron las especies supuestamente sustraídas, consistentes en dos celulares, ni se presentó una imagen de ellos en juicio.

De otro lado, acusa que la víctima dio cuatro versiones distintas sobre lo que hacía el domingo 5 de febrero a las 5.40 am en la medialuna del Cerro Dieciocho, de lo que la sentencia no se hace cargo. En una primera versión señaló que estaba en su vehículo *“escuchando música dentro, me había quedado dormido”*, en otra señaló que estaba *“en una fiesta al interior del vehículo”* y al leer su declaración previa afirmó que estaba esperando un pasajero, para finalmente terminar señalando que el pasajero era su amigo



Denis González, lo que este último refutó al ser contra examinado (en cuanto a ser un pasajero).

A ello se suman las inconsistencias en los horarios del relato de la víctima, en especial en la llamada a su amigo Denis que la sitúa apenas llegó a la casa (cerca de las 7.00 de la mañana), en circunstancias que Denis González afirma que ello ocurrió cerca de las 10 de la mañana. Resalta que el relato de Denis González fue considerado por el tribunal como “creíble” y que tanto él como la víctima afirmaron que entre las 10 y las 11 horas concurren al estacionamiento de la Medialuna y encontraron el vehículo pero no pudieron hacerlo partir con la copia de la llave porque ésta “no tenía pila”, por lo que fueron al Portal La Dehesa a comprarla y no pasaron 10 minutos y el vehículo ya no estaba, por lo que González llamó al 1405 denunciando el robo, llamada que fue registrada a las 10.47 horas. De ello infiere que la víctima tardó 4 o 5 horas en denunciar y no una o dos como asevera el fallo, lo que parece más consistente al relato de los acusados. En este punto destaca que no se trata de que la denuncia se deba hacer de inmediato sino que la víctima no actúa conforme a las máximas de la experiencia, pues lo normal es que si a alguien le roban las llaves del vehículo, se mantendría cerca y pediría ayuda y no lo abandonaría para volver 4 horas después.

Reitera que estas temáticas no fueron abordadas por el fallo, incurriendo en una doble infracción al deber de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pues vulnera el principio lógico de la razón suficiente al fundar sus premisas únicamente en hechos y circunstancias favorables a la pretensión fiscal; y tampoco se hace cargo de toda la prueba producida en juicio.

Argumenta que la dificultad de la víctima para dar una sola versión lógica y creíble dice relación con su oficio de chofer, pues reconocer que se está consumiendo droga dentro de su camioneta implica admitir una infracción a la ley de tránsito, al tiempo que se relaciona con la vergüenza y la sanción social a este tipo de actos.

Destaca que el único testigo presencial de cargo es la propia víctima, pues los restantes sólo relatan lo que él les dijo, por ello echa en falta la prueba que existía en la escena del delito y que el Ministerio Público no ofreció ni rindió, lo que permite la existencia de dudas. Señala, por último,



que en el lugar de los hechos existían al menos 7 cámaras de seguridad que pudieron tener la aptitud de zanjar la discrepancia en el relato fáctico de la defensa y la acusación, sin embargo no se realizaron las diligencias pertinentes por parte del Ministerio Público para obtener estos registros, pese a que fue una diligencia solicitada por la defensa.

II.- Consideraciones de esta Corte:

Tercero: Para principiar el análisis de la causal invocada se debe recordar que en el motivo duodécimo el tribunal de la instancia tuvo por establecida la existencia del siguiente hecho: *“El 05 de febrero de 2023 alrededor de las 06.00 horas Juan Luis Jara Rojas y Ezequiel Cáceres Gallegos, abordaron a Víctor Novoa Opazo quien se encontraba al interior del automóvil marca Kia modelo Sorento, patente LBCL-51, en la medialuna ubicada en el cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea, intimidándolo con un arma al parecer de fuego Ezequiel Cáceres, quien le dice bájate y quédate tranquilo mientras Juan Luis Jara Rojas sube al auto y se apropia con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño del teléfono celular marca Xiaomi y las llaves del referido vehículo, dándose a la fuga con las especies en su poder. La víctima cuando regresa a buscar su automóvil al lugar de los hechos con las llaves de repuesto, no encuentra su vehículo, en el que posteriormente son sorprendidos los imputados a pocas cuadras del lugar de los hechos.”*

Cuarto: En síntesis, los reproches formulados en el recurso tienen que ver con haber descartado el tribunal la tesis de la defensa, prefiriendo en cambio la de la acusación -por un lado- omitiendo la consideración de los aspectos inconsistentes con los hechos establecidos, lo que atañe al principio de suficiencia, y -por otro- basándose en la declaración del denunciante como única probanza para acreditarlos, lo que acusa como un problema de falta de corroboración.

Quinto: En relación a la versión de los imputados, debe apuntarse que esta misma sala ha señalado previamente que: *“En la elaboración de un fallo condenatorio, al construir su fundamentación, los jueces o juezas deben enfrentar un doble desafío: primero, tienen que demostrar que los hechos ocurrieron de una determinada manera (la propuesta por la acusación), pero -tanto o más importante aún-, es preciso también que descarten como posible que los hechos hayan acontecido de un modo diferente. Este último imperativo se intensifica todavía más cuando el acusado renuncia a su*



derecho a guardar silencio y entrega una versión alternativa de los acontecimientos, dotada de grados suficientes de verosimilitud, en el sentido que puede ser capaz de poner en entredicho la hipótesis acusatoria. De este modo, si existe otra posibilidad, potencialmente idónea para explicar los mismos hechos o su resultado –racionalmente aceptable, que deriva de los propios sucesos imputados o de la misma prueba rendida-, las o los sentenciadores tienen el deber ineludible de incorporarla en su resolución, como un antecedente a excluir, pero haciéndolo a través de un razonamiento probatorio aceptable y suficiente, so riesgo de afectar la validez y legitimación de la condena;”. (Sentencia de 30 de agosto de 2023, recaída en recurso de nulidad Rol N°3760-2023, fundamento cuarto);

Sexto: A lo expresado podría añadirse que, sin perjuicio del derecho a la defensa técnica o asistencia letrada, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 8.2, literal d), una garantía mínima en esta clase de asuntos es el derecho que tiene todo imputado de *“defenderse personalmente”*. De esto se sigue que si el acusado hace abandono de una de sus principales protecciones en el contexto de un enjuiciamiento penal y se allana a prestar declaración, quiere decir que cobra especial vigencia su derecho a ser oído y que, por lo mismo, surge para el tribunal el deber de hacerse cargo de sus planteamientos;

Séptimo: En el caso el tribunal desecha la tesis alternativa que propone que la víctima conocía a uno de los imputados y habría consumido drogas con ellos momentos previos al ilícito. Lo anterior, sobre la base de que *“ni siquiera pudieron decir cuál es el nombre completo de la víctima o cual era su dirección, de modo que no es plausible que hayan sido amigos”*. En este punto se debe ser enfático en que no resulta razonable ni conforme a la regla social descartar el conocimiento previo por ignorar el nombre completo o el domicilio de una persona. En efecto, la regla social indica que podemos conocer a muchas personas, e incluso compartir con ellas, sin saber necesariamente su nombre completo ni menos su domicilio, conociendo quizás sólo su apodo o nombre de pila.

Se debe hacer presente que los jueces de la instancia se limitaron a descartar la existencia de una “amistad” entre el imputado Cáceres y la víctima, en circunstancias que de la declaración de Cáceres se desprende que solo existía un conocimiento previo vinculado al esparcimiento y



consumo de drogas, que es indicativo de una relación mucho menos profunda que la amistad y que permite entender algunas situaciones difíciles de explicar cómodamente desde los hechos establecidos.

Por otro lado, era plausible que Víctor Novoa y Ezequiel Cáceres se conocieran, al menos de vista, dado que ambos residían en Lo Barnechea y cerca del lugar de los hechos, esto es, la Medialuna del Cerro 18; que según se desprende de sus declaraciones parece un lugar que suelen frecuentar.

Octavo: El tribunal de la instancia realiza afirmaciones categóricas al descartar la tesis de la defensa, como que *“no resultó confirmada por ningún medio de prueba, sino que al contrario fue totalmente desvirtuada”*; sin embargo, para ello se funda, únicamente en la declaración de la víctima que niega haber conocido o visto antes a ambos imputados. En efecto, si bien se cita como corroboración del relato la declaración del testigo Denis González, éste no resulta ser idóneo ya que por no haber presenciado los hechos no vio a los imputados y -en el punto- se limita a señalar *“mi amigo no los conocía”* sin dar razón de cómo lo sabe, pues en relación a los hechos es un testigo de oídas.

Tampoco el tribunal se plantea el hecho de que la negativa de la víctima de haber visto antes a los imputados, se pueda atribuir a la inconveniencia de reconocer el consumo de sustancias ilícitas, junto a la conducción de un vehículo para eventuales fines laborales, según dijo en algún momento (esperaba para recoger a un pasajero). En este sentido, es conforme a la experiencia que se suelen omitir circunstancias que generan vergüenza, involucran un ilícito o restan seriedad a la denuncia y, por ello, la tesis resultaba probable y era esperable un mayor esfuerzo probatorio y argumentativo para derrotarla.

Además los sentenciadores aluden -para desechar la tesis de la defensa- a la falta de explicación razonable en torno al abandono del vehículo por parte de Víctor Novoa, dejando a los dos imputados dentro. Al respecto, si bien resulta extraño que una persona obre así, también es conforme a la experiencia que las personas que han consumido alcohol y drogas durante la noche presenten conductas poco razonables o disruptivas en la madrugada, por lo que no se puede descartar que el hecho no haya ocurrido. En este punto se debe recordar que el propio ofendido, si bien niega consumo de drogas, reconoció haber venido de una fiesta en donde consumió alcohol.



En conclusión, la decisión de descartar la tesis de la defensa de un modo tan categórico resulta al menos apresurada y evidencia una falta de concordancia entre las conclusiones con las reglas del criterio humano, a la luz de la escasa probanza rendida.

Noveno: Pero eso no es todo. Al descartar las otras alegaciones de la defensa y optar por la versión fiscal, la declaración del denunciante se erige como la única prueba de cargo de la que se dispone para derrotar la presunción de inocencia, puesto que las restantes declaraciones se basan en lo que la víctima les contó y no fueron incorporadas al juicio las especies objeto del ilícito (teléfonos celulares) ni el arma que habría servido como medio de intimidación.

Era necesario entonces que esa declaración basal fuese clara, robusta y consistente. Empero, de la sola lectura de las transcripciones se advierten deficiencias del mismo relato de la víctima e inconsistencias del contraste de éste con el testigo que se supone debía corroborar sus dichos (Denis González), circunstancias que no fueron asumidas por el fallo y en aspectos relacionados con la centralidad del hecho atribuido.

En ese orden de ideas viene al caso acentuar que el ofendido ofreció un relato muy confuso sobre lo que hacía el domingo 5 de febrero, cerca de las 6.00 am en la medialuna del Cerro Dieciocho, pues cambió el relato de su declaración policial que consignaba que estaba “*en una fiesta al interior del vehículo*” por señalar que, si bien había estado en una fiesta antes, estaba esperando un pasajero que luego identificó como el testigo Denis González. Tal versión no fue corroborada por dicho testigo, quien reconoció haber acudido al llamado que le realizó su amigo Víctor Novoa recién cerca de las 10 de la mañana (y no cerca de las 7 am como lo sugirió la víctima). Así se evidencia una primera falencia en el relato que no fue salvada.

Tampoco se puede dejar pasar la inconsistencia de los horarios propuestos por la víctima en relación con el dato que proviene del llamado por el cual se denuncia el robo (10.57 am) y que demuestra una excesiva dilación en denunciar que los jueces de la instancia minimizan. En efecto si los hechos denunciados ocurrieron cerca de las 6 am y el ofendido llegó a la casa de su madre cerca de las 7 am no existe ninguna explicación para que esperara tres horas para llamar a su amigo y la denuncia recién se haya realizado casi cinco horas después.



El referido atañe a un hecho particularmente crucial, desde que concierne al momento inmediatamente posterior al hecho denunciado y que va contra la regla de la experiencia que postula que ante la existencia de un delito contra la propiedad, la denuncia suele hacerse con la brevedad que sea posible, lo que se une a la poco usual actitud de los imputados de no esconderse, permaneciendo cerca del lugar y a la circunstancia de no contar con las especies sustraídas ni el arma.

Décimo: Por consiguiente es dable advertir inconsistencias importantes en el relato de la víctima que no pueden ser juzgadas como irrelevantes o secundarias, de momento que versan sobre hechos determinantes en la cadena de sucesos y que, por ende, son capaces de generar una duda razonable acerca de la dinámica de los hechos y la efectividad de que haya existido la intimidación y apropiación con ánimo de lucro por la cual se acusó, menos aún que esta haya sido “*con un arma al parecer de fuego*”, aserción ésta que no encuentra respaldo suficiente en el fallo;

Undécimo: En las condiciones precedentemente expresadas solo puede concluirse que en la sentencia recurrida no se satisfacen las exigencias del artículo 342, letra c) del Código Procesal Penal, tanto por los vacíos en el discurso como por verse razones probatorias que no logran derribar la presunción de inocencia ni disipan las dudas razonables que surgen de los propios datos disponibles y de los argumentos desplegados en la sentencia que se examina. Tales falencias determinan la configuración del motivo absoluto de nulidad que se esgrime por la defensa, imponiéndose entonces la invalidación de ese fallo.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 360, 372, 374, literal e), 384 y 385 del Código Procesal Penal, **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado. Consecuentemente, se invalidan el juicio y la sentencia definitiva de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, recaída en la causa RIT O-243-2023, del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y se repone la causa al estado de celebrarse un nuevo juicio ante jueces no inhabilitados.

Redactó la ministra(s) señora Díaz Urtubia.

Regístrese y comuníquese lo resuelto.

RoI N° 486-2024.-



Pronunciada por la **Octava Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la ministra señora Lilian Leyton Varela y la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXTHXMSXYXG

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Omar Antonio Astudillo C., Ministra Lilian A. Leyton V. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, once de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a once de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXTHXMSXYXG